

Un futuro sin salida

13

Ningún presidente latinoamericano fue invitado a la festiva y protestada ceremonia de juramento de George Bush como 43º presidente de Estados Unidos. En compensación, se encontraba entre los huéspedes de la súper blindada Casa Blanca de aquel gélido 20 de enero de 2002, el colombiano Rodrigo Villamizar, un antiguo amigo del nuevo presidente. Ambos se habían conocido en una fiesta estudiantil en la universidad de Yale, en el lejano 1972. Desde entonces se habían ayudado siempre. George había colocado a Rodrigo en la burocracia de Texas, primero en el Comité de Programación Económica y después en la Comisión de Servicios Públicos. El colombiano, que mientras tanto se había convertido en “el hombre justo en el puesto justo”, se lo retribuyó unos años más tarde. George consiguió en 1986 de la Harken Energy, por la venta de la fracasada compañía petrolera Arbusto, propiedad de la familia Bush, un paquete de acciones por valor de 2.000 millones de dólares, el pago anual de 122.000 dólares anuales y un puesto en el consejo de administración. Cuando Rodrigo entró en el gobierno colombiano como ministro de Minas, adjudicó tres concesiones de explotación energética a la Harken, sobre todo en el Magdalena Medio, donde narcos y paras estaban realizando una despiadada “desinfección” política.

Todo continuó igual desde entonces. En el Magdalena Medio siguieron actuando tanto los paramilitares, gracias a la colaboración benevolente del ejército, como la Harken, gracias a la generosa financiación del Banco Mundial. Tampoco cambió la amistad entre George y Rodrigo. Apenas instalado en la Casa Blanca, Bush pensó incluso promover a su amigo

a Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, aunque el cargo quedó asignado luego a Otto Reich.¹ Hubiera sido una prueba de afecto y estima hacia el hombre que le servía de consejero en la difícil “cuestión colombiana”, y que luchaba desde hacía tiempo contra un cáncer. Hubiera sido, por otra parte, un desafío, ya que desde 1999 Villamizar era buscado formalmente por la justicia colombiana, a raíz de un escandaloso asunto de corrupción, del que resultó posteriormente condenado a cuatro años de prisión.

En los últimos días de julio de 2002, los representantes de las mayores multinacionales que operaban en Colombia se reunieron con el presidente Álvaro Uribe Vélez para solicitarle nuevos privilegios y, sobre todo, más seguridad para los dirigentes de sus instalaciones. Formaban parte de la delegación la Xerox, 3M, NCR, Kodak, Frontier y Gillette, pero ninguna empresa del sector energético. Había un motivo: Chevron, Oxy, Texaco, BP y Reliant y Harken se hallaban suficientemente protegidas por Washington y no necesitaban participar en encuentros como aquéllos. Aconsejado por Villamizar, George Bush rectificó la ruta del Plan Colombia, desviando el timón de la droga hacia el petróleo, y de los narcos a los guerrilleros, culpables de la desestabilización del país, pero sobre todo de atacar a los intereses económicos norteamericanos allí existentes. En el nuevo paquete de ayudas aprobado por el gobierno de Estados Unidos para el 2003, se destacaban 98 millones de dólares destinados a la instrucción de un nuevo batallón para defensa de los oleoductos que transportaban el crudo desde los yacimientos hasta los puertos del Caribe (objetivos casi diarios de los atentados de las FARC y del ELN), que en febrero 2005 recibió diez helicópteros estadounidenses para mejorar la vigilancia de los oleoductos.² Paradójicamente, la primera empresa beneficiada fue la Oxy, que contaba entre sus mayores accionistas a Gore, el adversario electoral de Bush, aunque el programa de protección incluía, evidentemente, los oleoductos de la Global Energy Development, socia de Harken, los gaseoductos de Enron, y las instalaciones de Haliburton, la antigua compañía de Dick Cheney. Para contentar a Bush, Álvaro Uribe militarizó poco después de su toma de posesión una gran parte de Arauca, la región colombiana con los mayores yacimientos de hidrocarburos, donde se instalaron un centenar de instructores del ejército norteamericano y de las MPC. “Después del 11 de septiembre, el asunto de seguridad petrolera se ha vuelto prioritario para Estados Unidos”, admitió la embajadora norteamericana en Bogotá,

1. *Counterpunch*, 12 de julio de 2002.

2. *Newsweek*, 25 de marzo de 2002 y *El Tiempo*, 20 de febrero de 2005.

Anne Patterson, desvelando anticipadamente el “síndrome de Irak” de su gobierno.³

Por más que la lucha contra el narcotráfico continuaba siendo enarbolada como primer objetivo en la guerra colombiana, era obvio que el tema de la droga enmascaraba otros intereses y que servía principalmente para difamar y atacar a los grupos rebeldes. Desde que las FARC habían empezado a convivir con los cultivos de coca, marihuana y amapola, cobrando tasas como hacían con cualquier otra fuente de riqueza existente en las zonas bajo su control, los gobiernos de Washington, y sobre todo de Bogotá, habían cambiado varias veces, y sin rubor alguno, de opinión sobre la relación entre la guerrilla y los narcos. En vísperas de las negociaciones con los hombres de Tirofijo en Caguán, el presidente Pastrana declaró, por ejemplo, que “Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo, y la confrontación de la guerrilla por un modelo económico, social y político que considera injusto, corrupto y auspiciador de privilegios”.⁴ Utilizó un acto importante en el Palacio de Nariño para dar, como subrayaron los periódicos colombianos, una especie de “adiós a la narcoguerrilla”. En realidad se trataba solamente de un “hasta la vista”. En los primeros meses de 2002, Pastrana volvió de pronto a describir a las FARC como bandidos y narcoterroristas. No había cambiado nada en ese tiempo por las cordilleras y selvas amazónicas, aunque sí en Manhattan, donde dos aviones, presumiblemente teledirigidos por Bin Laden, se habían abatido contra sendas torres. Sobre el tema terciaron asimismo, y en diversas ocasiones algunos representantes norteamericanos. El director de la DEA, por ejemplo, declaró después de los terribles atentados que “no hay evidencia de que ninguna unidad de las FARC o del ELN haya establecido redes de transporte internacional, distribución de grandes cantidades de droga o sistemas de lavado de dinero proveniente de la droga en Estados Unidos o Europa”. Pero unos días más tarde, la Casa Blanca y el Pentágono volvieron a acusar a las FARC de ser el cartel más importante de la cocaína.

El contenido propagandístico de semejantes afirmaciones era evidente, así como sus efectos prácticos. La guerra financiada con el Plan Colombia y concentrada en las regiones meridionales del país, controladas por las FARC, solamente atacaba al 1% del narcotráfico nacional. Eso significaban los 50 millones de dólares de ganancia que el ex zar de la droga,

3. *El Tiempo*, 16 de febrero de 2002.

4. *El Espectador*, 23 de octubre de 1998.

Barry Mc Caffrey atribuía a la guerrilla de Tirofijo, frente a los 50 mil millones del total de ingresos en Colombia por la venta de estupefacientes.⁵ Estados Unidos y el gobierno colombiano se mostraban inermes ante el comercio realizado por centenares de organizaciones esparcidas por el país y que, por sus reducidas dimensiones, lograban escapar al control de la policía o tenían mayores posibilidades de corromperla. Y, sobre todo, ambos gobiernos toleraban la unión cada vez más estrecha entre los nuevos jefes mafiosos y los jefes paramilitares, dueños de buena parte de las costas pacífica y atlántica y, especialmente, de los principales puertos del país, desde Tumaco y Buenaventura hasta Turbo y Santa Marta, por donde salían las cargas de droga. Después de la destrucción de los carteles de Medellín y Cali, habían emergido sólo los clanes del Norte del Valle y de Envigado, una fracción de Medellín, dirigidos por hombres como Diego Montoya o Julio Fabio Urdinola y, el más importante de todos, Diego Fernando Murillo, con su doble identidad de narcos y paramilitares. Después de que su jefe, Fernando Galeano, fue muerto por Escobar, Murillo comandó junto con Castaño el grupo de los Pepes, ganándose, como muchos otros, una especie de salvoconducto por parte de la policía colombiana y de la DEA.⁶ Conocido con el apodo de don Berna, alcanzó muy pronto el vértice de las AUC, desde el que gestionaba toda actividad ligada al tráfico de droga, cuyo control ejercía a través de los bloques paramilitares que dominaban las regiones que asoman al Océano Pacífico.

Con estas premisas no podían sino extenderse el tráfico y los cultivos ilegales, a pesar del bombardeo salvaje de herbicidas, prohibidos en Estados Unidos pero lanzados copiosamente en Colombia, con efectos desastrosos sobre la naturaleza y sobre la salud de los habitantes. "Hace dos años había en Colombia 125.000 hectáreas sembradas de coca y amapola, y se han destruido 100.000 con fumigación química, pero hoy hay 165.000: la destrucción total es de 265.000 pues la destrucción de la siembra y de la fumigación no se contrarrestan sino que se suman", escribía amargamente Antonio Caballero.⁷

El fracaso del tan aclamado Plan Colombia estaba previsto incluso por la CIA. Un informe del 2000 de la agencia norteamericana pronosticaba un "efecto globo", por el que las fumigaciones se habían llevado a cabo solamente sobre los cultivos de toda el área andina, sin involucrarse

5. Datos de la Dirección Antinarcóticos de la policía colombiana, en: www.policia.gov.co, y de diversas revistas, como *The Economist*, agosto de 2001.

6. *El Tiempo*, 16 de agosto de 2002.

7. *Semana*, 17 de febrero de 2002.

para nada con el narcotráfico.⁸ Pero esto tampoco importaba mucho a Estados Unidos ya que lo estaba transformando con el tiempo en la Iniciativa Andina, es decir, en un ambicioso programa de sumisión del área donde más riesgo corrían los intereses norteamericanos en el continente. En los años setenta Estados Unidos había logrado responder al desafío surgido en países del cono Sur, como Argentina, Uruguay y Chile, promoviendo diferentes golpes de Estado. En la década siguiente, había intervenido en Centroamérica, financiando ejércitos mercenarios en Nicaragua e incentivando el terrorismo institucional de El Salvador y Guatemala. Pero desde los años noventa, se veía de nuevo presionado por la poderosa guerrilla colombiana, el régimen del ex coronel paracaidista Hugo Chávez en Venezuela, y por el movimiento indígena y campesino de Ecuador, que había demostrado en muchas ocasiones su enorme capacidad de movilización popular. Tres enemigos diferentes en países con el elemento común de poseer grandes yacimientos de petróleo, materia prima más indispensable aún tras el agravamiento de la tensión en Oriente Medio y en el golfo pérsico. Tres enemigos, además, que mostraban una solidaridad objetiva entre sí, con la negativa de Hugo Chávez a ceder su propio espacio aéreo a los aviones de reconocimiento de Estados Unidos, o la continua movilización en Ecuador contra la militarización de la frontera con Colombia. El así llamado “triángulo radical” preocupaba todavía más por el riesgo de que contagiara a otros países vecinos, como Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Paraguay, sacudidos ya por movimientos sociales cada vez más organizados contra las políticas neoliberales y contra el proyecto de integración del continente americano para beneficio total de Estados Unidos. La Casa Blanca había decidido comenzar por Colombia para someter el área andina, aprovechando que había elegido a Uribe Vélez, un presidente fiel y afín ideológicamente a Bush.

La Iniciativa Andina tenía asimismo el propósito de reafirmar dentro del “patio trasero” la creencia de que el gringo era invencible y la inevitabilidad de las políticas neoliberales, a pesar de sus enormes fracasos. “Una vez que se desafía a la mística y el cuestionamiento se extiende sobre el continente, se da un nuevo ímpetu a las fuerzas de la oposición, desafiando las reglas de juego y las normativas neoliberales que facilitan el saqueos de sus economías”, ha explicado el escritor James Petras.⁹ La iniciativa norteamericana en el “triángulo radical” utilizaba armas diferentes. Mientras en Venezuela insistía en la presión de las elites privilegia-

8. *El Tiempo*, 20 de enero de 2004.

9. James Petras, *Cuba Siglo XXI*, en <http://www.cubaxxi.f2s.com>

das para alimentar el descontento contra el gobierno bolivariano, en Ecuador se valía de los chantajes financieros para obtener una subordinación completa del ex coronel Lucio Gutiérrez (olvidado de todas las promesas sociales y nacionalistas que lo habían llevado a la presidencia), y en Colombia daba su primacía al aspecto bélico, mediante un apoyo incondicional a Uribe.

El gobierno norteamericano no escondía su entusiasmo por su política social y de orden público. Leyes como la que ampliaba por decreto la jornada laboral normal en cinco horas, situándola entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, o la que preveía penas de ocho a doce años de cárcel para los periodistas culpables de difundir “informaciones que puedan obstaculizar el eficaz desarrollo de las operaciones militares”, eran una puesta en práctica ejemplar del ideal neoliberal autoritario de la administración Bush.¹⁰ Las decisiones del gobierno colombiano resultaban de todas maneras arriesgadas. Aplicando la fórmula “corazón grande” únicamente con los poderosos, las multinaciones extranjeras, los empresarios y los latifundistas, y la “mano firme” con los trabajadores y los más pobres,¹¹ se enemistó con la mayoría de la población, extenuada por una política económica que se centraba en los gastos militares. Una clamorosa confirmación se obtuvo en el último fin de semana de octubre de 2003. Mientras el sábado un referéndum presentado como moralizador y transformado por Uribe en un plebiscito sobre su persona no lograba alcanzar el quórum necesario del 25%, en las elecciones administrativas del domingo eran derrotados la mayor parte de sus candidatos por los del Polo Democrático. Además de conquistar con Lucho Garzón la alcaldía de Bogotá, considerado el puesto de poder más importante tras el presidencial, posiciones contrarias a la seguridad democrática consiguieron para sus hombres la alcaldía de Medellín, Cartagena y hasta de algunos centros sometidos a la presencia paramilitar, como el puerto petrolero sobre el río Magdalena de Barrancabermeja. La consternación se difundió por la oligarquía y la gran prensa que, desde que Uribe había alcanzado la presidencia, había continuado atribuyéndole a coro una popularidad del 70%, sin otro fundamento que sus propios deseos. Al descubrir su propia debilidad, Uribe pareció devanar improvisadamente: cambió a varios ministros clave de su gobierno y confió el mando de las Fuerzas Armadas al general Carlos Ospina, acusado por las organizaciones humanitarias más importantes de haber colaborado con los escuadrones paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso. Y se ató de manera irremediable cada vez más a Estados Uni-

10. *El Tiempo*, 26 de agosto de 2002 y *El Espectador*, 1º de septiembre de 2003.

11. *El Tiempo*, 3 de agosto de 2002.

dos, al que está ligado por una ayuda militar calculada en casi tres mil millones de dólares en los tres últimos años que, en buena parte, retornan al remitente como pago de armas e instructores públicos y privados. Y dado que, como dice el título de un artículo de *Semana* “No hay almuerzo gratis”, Uribe debe satisfacer toda petición de Washington, comenzando por el apoyo solitario dentro del ámbito suramericano dado por Colombia a Estados Unidos en la invasión iraquí, y permitiendo que la misión diplomática estadounidense, la mayor del planeta, controle, entre otras cosas, la actividad de los batallones militares, las fumigaciones de los cultivos ilícitos, los organismos de investigación penal, desde la Fiscalía, la policía, el DAS y Medicina Legal, las cárceles de máxima seguridad, el entrenamiento de los jueces, el nuevo sistema acusatorio e incluso, el entrenamiento de los perros antinarcóticos.¹²

A pesar de sus cuantiosos recursos, tanto la Casa Blanca como su sucursal del Palacio de Nariño no tienen grandes posibilidades de ganar la primera de las batallas andinas, es decir, derrotar militarmente a la guerrilla o debilitarla hasta el punto de obligarla a una rendición parecida a la firmada en los años noventa por algunos grupos rebeldes de Colombia, El Salvador o Guatemala. Las previsiones optimistas de los gobiernos norteamericanos y colombianos proceden en gran parte de análisis erróneos o de su misma costumbre de creer las mentiras que ellos mismos cuentan. Por ejemplo, cuando exageran la dependencia del narcotráfico por parte de la guerrilla, olvidan los orígenes de las FARC –y del ELN–, muy anteriores a la “bonanza” de la cocaína, e infravaloran las otras fuentes de aprovisionamiento rebelde (sobre todo comisiones, extorsiones y robos). Y cuando aseguran que pueden borrar el narcotráfico del país, ocultan los repetidos fracasos de las diferentes cruzadas llevadas a cabo hasta el presente.

Para aislar y combatir la guerrilla, Washington y Bogotá deberían eliminar o atenuar las causas políticas y sociales que la han generado y que continúan alimentándola. Así como para combatir al narcotráfico deberían anular su razón de ser, legalizando la producción y el comercio de la droga.

Pero no hay nada de esto en las intenciones de ambos presidentes. Por el contrario, las diferentes medidas tomadas y todas las estrategias –desde el Plan Colombia hasta la Iniciativa Andina–, sirven solamente para defender un sistema de poder político y económico que nutre ese estado de miseria, injusticia, odio y frustración que, por diversos caminos, engrosa las filas de la delincuencia más o menos organizada y, más todavía, las de la subversión.

¹². *El Tiempo*, 28 de enero de 2004.